

Resolución No. 516 del 25 de noviembre de 2013

"Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria ambiental".

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009, facultades delegadas por el Director General mediante la Resolución No N°014 de Febrero de 1998 y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que el 03 de Diciembre de 2008, se recibió queja por parte de la Coordinación Policía Ambiental DECES, donde pone en conocimiento la presunta existencia de unos establecimientos para el sacrificio de especies menores (chivos y cerdos); los cuales funcionan sin los requisitos legales, provocando con el vertimiento y mal manejo de los residuos sólidos, y líquidos gaseosos la atracción de las aves rapiñas.

Que por auto del 10 de diciembre de 2008, se programó visita de inspección en el parqueadero el millonario, como consecuencia de esa visita se recibió informe de los ingenieros ambientales SAIDA CORZO y JUAN CARLOS RODRIGUEZ, quienes consignaron en el las presuntas contravenciones ambientales.

Que este despacho mediante auto 515 del 08 de septiembre de 2011, inició indagación preliminar y ordenó visita de inspección técnica a los mataderos de Equino, la mona y el parqueadero el millonario, ubicados en Jurisdicción municipio de Valledupar-Cesar.

Que mediante Resolución No 054 del 04 de Marzo de 2012, la oficina jurídica de Corpocesar, Inició Proceso Administrativo Ambiental y por resolución No 343 del 20 de agosto de 2013 formuló pliego de cargos contra el Señor PEDRO GOMEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía número 77.012.994, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que teniendo en cuenta que la caducidad de los procedimientos sancionatorios es una figura que tiene como fin preservar el orden público y el debido proceso, en tanto que la Corporación Autónoma Regional del Cesar tiene el deber de verificar con exactitud la fecha de ocurrencia de los hechos que nos atañen en el presente caso.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.

Que en la presente investigación administrativa, tenemos se tuvo conocimiento desde el 03 de diciembre de 2008 por la queja presentada por la Coordinación Policía Ambiental DECES, donde pone en conocimiento la presunta existencia de unos establecimientos para el sacrificio de especies menores (chivos y cerdos); los cuales funcionan sin los requisitos legales, y que por auto del 10 de diciembre de 2008, se programó visita de inspección en el parqueadero el millonario, y que por auto 515 del 08 de septiembre de 2011 se inició

indagación preliminar y ordenó visita de inspección técnica a los mataderos de Equino, la mona y el parqueadero el millonario, ubicados en Jurisdicción municipio de Valledupar-Cesar.

Que solo hasta el 04 de Marzo de 2012, esta oficina inició proceso administrativo ambiental y por resolución No 343 del 20 de agosto de 2013 formuló pliego de cargos contra el Señor PEDRO GOMEZ TORRES; siendo lo procedente declarar la caducidad del presente proceso, por cuanto se dio inicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, y en vigencia del Decreto 1594 de 1984.

Que los procesos sancionatorios ambientales adelantados a la luz del Decreto 1594 de 1984, se remitieron a la aplicación del mandato del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el plazo de la caducidad por cuanto aquél no definía expresamente un término de caducidad, bajo esta premisa se obedecía al mandato: "... la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."

Que de conformidad con lo anterior, la normatividad aplicable al presente caso es lo establecido en el Artículo 38 del Código Contenciosos Administrativo, la cual prevé que el termino para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas.

Que para efecto de las investigaciones que adelantan las autoridades administrativas, la caducidad tiene una definición bien específica que no puede confundirse con la caducidad de las acciones contenciosas administrativas que puedan ejercerse ante la jurisdicción competente tales como las de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual y electoral.

Que la caducidad en el entendido dentro del contexto de las investigaciones administrativas ha sido definida por el H. Consejo de Estado en sentencias del 14 de Julio de 1995, expediente 5098 MP Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de Abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP Doctor Libardo Rodríguez, en los siguientes términos:

"Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el termino ni se interrumpe, ni se prorroga y es la ley que al señalar el termino y el momento de su instalación, 'precisa el termino final e invariable...."

Que respecto al caso en concreto, es importante señalar que los hechos que originaron e iniciaron esta investigación datan del año 2008. De manera tal, que las fechas son contundentes y los hechos debatidos también, pues cualquier acción administrativa producto de la presunta violación, no podría generar los efectos sancionatorios producidos, pues ha transcurrido el tiempo inexorable y por ello se produce el fenómeno de la caducidad contemplado en nuestra legislación.

Que si bien pudo incumplirse con la normatividad ambiental, también lo es que han transcurrido más de tres años hasta hoy desde la ocurrencia de los hechos materia del proceso de investigación, por lo tanto ha de declararse que la facultad sancionatoria que le asistía a esta Corporación para imponer la sanción caducó, y por ende en la parte resolutive de este acto administrativo ha de precisarse así.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, las autoridades administrativas están obligadas a tomar las decisiones que en derecho corresponda, motivadas, al menos de manera sumaria si afecta a particulares, y de acuerdo a las pruebas obrantes en las diligencias.

Que así mismo, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala que en aspectos no contemplados en el mismo, se seguirá lo normado en el Código de Procedimiento Civil.

Que el artículo 126 del Código de procedimiento Civil, determina que concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa, por lo cual se procederá a archivar el presente expediente.

Que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos sancionatorios derivados de la infracción a las disposiciones en materia ambiental, quiso unificar su criterio y orientar su desarrollo procesal a través de un mecanismo o norma de carácter especial, como es la prevista para la declaratoria de la caducidad de la facultad sancionatoria.

Que en la actualidad el régimen sancionatorio ambiental está previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, el cual previó en el artículo 10 un término de caducidad de la facultad sancionatoria de 20 años, contados desde el momento de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción, no obstante este término no puede aplicarse al presente asunto, como quiera que la acción generadora de la imputación ocurrió con anterioridad a la expedición de la norma en mención.

Que por ende, considera pertinente la Oficina Jurídica aplicar en materia de caducidad de la facultad sancionatoria, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en el principio de legalidad a que alude el artículo 29 superior, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al disponer que "las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que entran a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

Que siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración proceda de oficio, por cuanto al iniciar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

Que en igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera edición 2004, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente:

(...) Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte. (...)

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa de la facultad sancionatoria de CORPOCESAR, dentro del proceso sancionatorio de carácter ambiental iniciado mediante Resolución No 054 del 04 de Marzo de 2013, contra el Matadero La Mona

ubicado en la carrera 19 No 44-65 Barrio 25 de Diciembre de Valledupar- Cesar, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las diligencias contenidas en el expediente No. 233-08, por las razones expuestas en la parte motiva del presente provisto.


ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Matadero La Mona ubicado en la carrera 19 No 44-65 Barrio 25 de Diciembre de Valledupar- Cesar, representado legalmente por PEDRO GOMEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía número 77.012.994.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: Contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios del Departamento del Cesar para su conocimiento y fines pertinentes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE



DIANA OROZCO SANCHEZ
Jefe Oficina Jurídica.

Revisó: DIANA OROZCO V^oB^o
Proyecto: Kenith Castro
EXP:233-08